



Statement on Central America

Edición Bilingüe

**November 19, 1987
United States Catholic Conference**

*Declaración Sobre la
América Central*

19 noviembre de 1987
Conferencia Católica de los
Estados Unidos

Contenido

I. Introducción / 35

II. La América Central Hoy / 38

Problemas Específicos de la América Central / 39

Voces procedentes de la América Central / 40

III. La América Central y la Política de los Estados Unidos / 43

IV. Recomendaciones resumidas / 55

América Central en contexto / 55

Prioridad de justicia económica / 55

Las superpotencias y la región / 56

El proceso de paz / 56

El apoyo necesario de Estados Unidos al proceso de paz / 57

El papel de apoyo de otros estados americanos / 57

Refugiados / 58

Nuestra necesidad de reconciliación / 59

V. Conclusión / 61

I. Introducción

Estamos reunidos en un momento de esperanza sin precedentes para la paz en la América Central. Celebramos la sabiduría y la valentía de los que han hecho más probable lo que hace algunos meses parecía imposible. Reunidos en Guatemala en la fiesta de la Transfiguración del Señor, fiesta patronal de El Salvador, los cinco presidentes de América Central comprometieron a sus gobiernos a un proceso de paz y reconciliación para cada uno de sus países y para la región. Rezamos para que sus esfuerzos alcancen, con la luz divina, su triunfo final.

Estamos plenamente concientes de lo delicadas que son estas semanas durante las cuales se ha puesto en marcha el proceso de implementación. Deseamos que nuestras palabras sean una expresión más de nuestro fuerte apoyo al proceso de paz que se viene desarrollando y también de nuestro esfuerzo continuo por reflexionar críticamente sobre los asuntos morales que están en juego. Por más de una década hemos dirigido nuestra atención a las relaciones de nuestro país con la América Central. Nos hemos unido a nuestros hermanos obispos centroamericanos para pedir la adopción del diálogo y de la negociación sincera entre los contendientes. Y con los obispos hemos insistido, y continuamos insistiendo, que la verdadera paz sólo vendrá cuando las causas fundamentales de los conflictos, especialmente la larga ausencia de la justicia social, se enfrenten con entereza.

La paz, o sea el cese de hostilidad, puede que esté muy cerca, y por eso todos tenemos que dar gracias. Pero la verdadera paz, que es don de Dios y fruto de la justicia, continuará eludiéndonos hasta

que los hombres y mujeres de buena voluntad aquí y en todo el hemisferio, se decidan a construir juntos la civilización del amor a que han sido llamados.

“América Central se ha convertido últimamente en centro de atención y preocupación del mundo entero”. Así escribían los obispos de la América Central y Panamá hace tres años en su documento principal sobre la crisis regional titulado *Nuestra Salvación es Cristo*. América Central ha sido claramente centro de gran atención y preocupación aquí en Estados Unidos, tal como advertimos nosotros mismos en nuestra “Declaración sobre la América Central” en 1981, y representa una preocupación muy especial para nosotros en la Iglesia.

En el curso de los años, hemos rezado, predicado y trabajado en formas diversas por la paz y la justicia en esa región asediada. Hemos expresado nuestra solidaridad con nuestros hermanos los obispos y sus iglesias locales cuya peregrinación está jalonada de grandes sufrimientos. Hemos expresado nuestras opiniones públicamente en numerosas oportunidades tratando de orientar la política de nuestro país a formas cada vez más constructivas.

Todo esto y más—nuestras oraciones, nuestras expresiones de solidaridad eclesial, nuestros esfuerzos por influir en la política pública—son elementos claros y apropiados de nuestra misión pastoral hoy. Según advirtió el Santo Padre la pasada primavera en Santiago:

La Iglesia, tal como se expresó claramente en el Segundo Concilio Vaticano, “no se confunde en modo alguno con la política ni esta ligada a sistema político alguno” (*Gaudium et Spes*, 76). Pero también es cierto que, como imperativo de la misión que recibió de

Jesucristo, la Iglesia ha de proyectar la luz del Evangelio sobre todas las situaciones temporales, incluyendo la actividad política, de forma que la sociedad pueda manifestar cada vez más los valores morales o éticos que revelan el carácter transcendental de la persona y la necesidad de proteger sus derechos inalienables.

Este año marca una década de atención continua por nuestra conferencia episcopal a las cuestiones de la América Central. En este período, podemos advertir ciertos acontecimientos bienvenidos en uno u otro país: avances en la comunidad democrática, elección de presidentes civiles, reducción de algunas de las más flagrantes violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, en general, la década ha sido testigo de un deterioro de la vida social, política y económica de la región. Es a esta situación de crisis, y al papel de nuestro propio gobierno que le afecta, a que dirigimos aquí nuestra atención.

Es nuestra impresión que las crisis que hoy afligen a la América Central, ciertamente a la América Latina en general, no son comprendidas adecuadamente por los órganos responsables de la política y por los ciudadanos en general; que esa concentración de la política ha sido distorsionada por la atención casi exclusiva a un país, y que el amplio debate público que debiera informar a nuestra política ha sido falsamente restringido. Estas reflexiones se ofrecen en un esfuerzo por ayudar a estimular criterios nuevos, y esperamos que más profundos, acerca de la política de nuestro gobierno hacia la región.

II. La América Central Hoy

En el curso de esta década, el nivel y calidad de la vida de la gran mayoría de los ciudadanos centroamericanos han descendido. Innumerables sufrimientos y la miseria han aumentado espectacularmente y la región ha sido llevada al borde mismo de la desolación.

En parte, esto es cierto para gran parte del hemisferio donde los años 1980 han sido llamados "una década perdida" para las economías de la mayoría de los países latinoamericanos. El desempleo y subempleo han aumentado enormemente; la inflación en algunos países ha alcanzado niveles anteriormente inimaginables; casi todos los países gravitan bajo el peso de una fuerte deuda externa, y el endeudamiento total de la América Latina se aproxima ahora a los \$400.000 millones. Es esta tragedia la que abordó el Santo Padre cuando se reunió con la Comisión Económica de las Naciones Unidas para la América Latina y el Caribe el pasado mes de abril, advirtiendo que la crisis experimentada por la región en su conjunto era la más grave de la media centuria pasada. Es esta "perspectiva de dolor" lo que le llevó a emitir, en Chile,

un llamamiento a las autoridades públicas, a las empresas privadas, a cualquier persona o institución en toda la región al alcance del sonido de mi voz y, naturalmente, a los países desarrollados, instándolos a que hagan frente a este formidable reto moral que fue descrito hace un año en la *Instrucción sobre libertad cristiana y liberación* en los términos siguientes: "El fin directo de esta reflexión en profundidad es la elaboración y la puesta en marcha de programas de acción audaces con miras a la liberación socio-

económica de millones de hombres y mujeres cuya situación de opresión económica, social y política es intolerable" (#81).

Problemas Específicos de la América Central

La actual crisis de la América Latina, especialmente las crisis económicas del crecimiento, la inflación, el desempleo y la deuda, se reflejan plenamente en los países pequeños y pobres que constituyen el Istmo Centroamericano. Pero estos países también han experimentado su propio sufrimiento especial en años recientes.

Pobreza, injusticia y violencia; militarismo excesivo y corrupción generalizada; un deterioro de la vida familiar y los valores culturales; confusión religiosa e ideológica general; y encarnizadas guerras internas que en esta década han cobrado más de 150.000 vidas, desplazado a casi dos millones de personas y producido cientos de millones de dólares de pérdidas, éstas son algunas de las realidades básicas de gran parte de la América Central en nuestros días.

En los recientes debates públicos celebrados en nuestro país sobre la política de los Estados Unidos hacia la región, estas realidades parecen haberse relegado a posiciones de segunda importancia cuando no se han ignorado totalmente. Una concentración casi exclusiva de la atención en Nicaragua y un debate de política reducido a la cuestión del apoyo de los Estados Unidos a la oposición armada reflejan, en nuestra opinión, un enfoque sesgado e inadecuado.

Voces procedentes de la América Central

Un punto de vista más completo puede encontrarse en los mensajes conjuntos del episcopado centroamericano emitidos en sus asambleas bienales regulares. En ambas de sus asambleas de 1986 y 1984, hablando como obispos y pastores, identificaron los mismos campos problemáticos de mayor preocupación para sus iglesias locales. Convendría considerarlos.

En primer lugar, naturalmente, está el problema de la violencia armada: la violación de los derechos humanos, los conflictos armados existentes y el peligro de su expansión. Luego está la cuestión afín del militarismo, del papel exagerado asumido por las fuerzas armadas en la mayoría de esas sociedades, debido en parte a las subvenciones generosas proporcionadas por potencias exteriores. En tercer lugar está la cuestión de una corrupción generalizada, tanto pública como privada. Cuarto, lo que puede parecer una cuestión de política pública improbable pero que representa la mayor preocupación para los obispos de la América Central es la manipulación de la fe católica y la religiosidad popular por tres grupos distintos: sectas fundamentalistas que buscan agresivamente ganar prosélitos, muchas de ellas con vínculos financieros a Estados Unidos; los sectores católicos políticamente más radicales identificados como la "iglesia popular" y los sectores conservadores intransigentes que tratan de poner el Evangelio al servicio de sus propios intereses. Y quinto, los ataques a la institución del matrimonio y de la familia procedentes de distintos sectores aunque incluyendo, según los obispos, campañas financiadas por gobiernos ex-

tranjeros que imponen valores hostiles a la cultura existente.

Consideramos digno de repetición lo que nuestros hermanos los obispos de la América Central han dicho acerca de la cuestión fundamental que más directamente está relacionada con la política de nuestro propio gobierno, el problema de la violencia, la guerra y la paz:

La violencia armada ha venido y sigue azotando, con peligro de volverse conflicto regional, varias de nuestras repúblicas, con el consiguiente agravarse de desplazados forzosos dentro de cada país, el doloroso drama de los refugiados, la viudas y huérfanos en constante aumento, el abandono de tierras agrícolas y el aumento de la desocupación, el hambre, la enfermedad y la falta de médicos y medicinas.

Aunque estos conflictos hayan tenido causas internas, se ven potenciados por dos factores externos: el ideológico, generalmente marxista de los grupos revolucionarios, y el de la seguridad nacional, en el que suele inspirarse la acción represiva de las Fuerzas Armadas y la intromisión de las grandes potencias por mantener sus zonas de influencia, dando pábulo al armamentismo y militarización para buscar un precario equilibrio de fuerzas, que pone en constante peligro la paz de la región.

No podemos menos que condenar la guerra y el consiguiente envío de armas a Centroamérica y hacemos una ferviente invitación al diálogo para la paz.

En ese sentido damos nuestro aliento a la hermana Iglesia de El Salvador, que ha luchado para que se llegara a un diálogo y ha sido aceptada por ambas partes como moderadora. Alentamos también el esfuerzo de países hermanos que buscan medidas efectivas de control para que cese la intervención armada en países vecinos, se retiren de la región fuerzas extranjeras, y se deje a los centroamericanos arreglar pacíficamente sus diferencias. Elevamos nuestra voz igualmente, para que los que tienen poder de decisión en el nivel geopolítico, decidan pacíficamente

sus diferencias sin seguir ensangrentando inútilmente esta región. (*Mensaje de la XXI Sesión Plenaria del SEDAC, Tegucigalpa, 29 de noviembre de 1984*).

En estas líneas, los obispos de la América Central y Panamá han resumido gran parte del problema real de la América Central y su única solución aceptable; a saber, que la devastación de la guerra afecta desproporcionadamente a los más vulnerables, a los más pobres, y deprime economías ya debilitadas; que, si bien los conflictos tienen raíces autóctonas en los patrones de injusticia desde hace tiempo arraigados, la interferencia de las superpotencias ha agregado la dimensión geopolítica, amenazando con convertir el problema en una guerra aún mayor; que la respuesta está en un diálogo eficaz entre las partes beligerantes, facilitado por los países hermanos de la América Latina, en el que las superpotencias resuelvan dirimir sus diferencias fuera de la esfera centroamericana.

III. La América Central y la Política de los Estados Unidos

Teniendo presente esta visión panorámica, echemos ahora una breve mirada a cada uno de los países, examinando las características relacionadas con distintos aspectos de la política de los Estados Unidos.

El Salvador, anteriormente centro de la atención, ha desaparecido casi totalmente del debate de la política. La guerra costosa, ahora en su octavo año, puede haber dejado de aparecer en nuestros periódicos pero no ha dejado de influir en las vidas del pueblo de El Salvador. La gente sigue perdiendo la vida, en confrontaciones armadas, en bombardeos aéreos, a causa de minas terrestres. Ambos grupos de combatientes cometen graves violaciones de derechos humanos comúnmente aceptados. Aún continúan las matanzas y desapariciones por las llamadas brigadas de la muerte, aunque no, por supuesto, a los niveles abrumadores de hace unos años. El sistema de justicia penal apenas funciona; no parece haber un solo caso conocido de personal militar castigado penalmente por abuso de los derechos humanos contra ciudadanos salvadoreños. El terremoto de octubre de 1986 ocasionó tal destrucción, dejando sin hogar a 300.000 personas, que fue comparable, utilizando las palabras del Arzobispo Rivera, a una segunda guerra.

Los refugiados y las personas desplazadas siguen siendo aspectos destacados de la realidad salvadoreña. Muchos de los "refugiados internos", más personas que habían huido a centros administrados por la Iglesia ya en 1980, han recibido

ayuda para reubicarse, pero las personas siguen acudiendo en gran número a la ciudad huyendo de las zonas de conflicto y muchas siguen buscando refugio en los Estados Unidos. Cualquiera sean sus motivaciones individuales y personales, la mayoría de estas personas han escapado de circunstancias verdaderamente desesperadas, de un país destrozado por la guerra y devastado por el desastre natural, y se les debería permitir—una vez han realizado el difícil viaje hasta aquí—permanecer al menos hasta que las condiciones en El Salvador mejoren verdaderamente. Una presidencia civil es el principio y no el fin de las reformas y mejoras necesarias.

Muchos refugiados también siguen viviendo en campamentos en Honduras y se les debe facilitar, pero sin ser forzados en contra de su voluntad, el regreso tan pronto haya seguridad de un regreso sin peligro y de seguridad en su patria. Instamos a la Alta Comisión de las Naciones Unidas para Refugiados a que continúe cuidando y protegiendo a estas personas.

La Ley de Reforma y Control de la Inmigración recientemente dictaminada ha ocasionado gran preocupación entre muchas personas en El Salvador, incluyendo los obispos del país, que temen que puede resultar en la repatriación forzada de grandes números de salvadoreños. Hay noticias de que un gran número está regresando ya, en parte porque los empleadores los han despedido o se han negado a contratar a salvadoreños indocumentados por el miedo a veces infundado de sanciones. El regreso de muchos miles tendría repercusiones que van mucho más allá de las eminentemente económicas, aumentando casi ciertamente la lucha civil

y la violencia que por tan largo tiempo han azotado a este diminuto país.

El Diálogo para la Paz entre el gobierno y la oposición, que la Iglesia y especialmente el Arzobispo Rivera Damas han proseguido incansablemente, hasta hace poco se había desmoronado en gran parte. El nuevo proceso de paz centroamericano, el acontecimiento más esperanzador en años, insta a un diálogo interno en El Salvador y puede lograr reavivar las conversaciones necesarias. Seguimos instando a nuestro gobierno a que proporcione todo el aliento posible a este proceso.

Finalmente, la cuestión de la ayuda militar a El Salvador. Esta era la cuestión central que teníamos ante nosotros en 1981 al discutir y votar sobre nuestra declaración relacionada con la América Central. Entonces llegamos a la conclusión, como había rogado el Arzobispo Romero inmediatamente antes de su asesinato, de que Estados Unidos no proporcionase armas a la entonces junta civil-militar. Reconocemos que desde entonces se han producido cambios, incluyendo la elección de un presidente civil. Y aunque también reconocemos el derecho en principio de un estado soberano a buscar en el extranjero los medios para su propia defensa, no podemos aceptar que potencias exteriores, esencialmente nuestro país y la Unión Soviética, compitan entre sí avivando el fuego en un país que ya está ardiendo. En el sentido en que se aplica a ambas potencias, no unimos a los obispos centroamericanos cuando dicen, tal como citamos arriba, "No podemos menos que condenar la guerra y el consiguiente envío de armas a Centroamérica".

Tenemos preocupaciones adicionales acerca de nuestra ayuda militar a El Salvador, que justamente

representa un problema aún mayor. En el curso de los últimos cinco años, El Salvador ha recibido una ayuda militar sustancial, comenzando con la asignación de 1980 a la que se opuso el Arzobispo Romero, de menos de \$6 millones, hasta la cifra máxima alcanzada en 1984 de más de \$200 millones y los niveles actuales de \$100 millones, aproximadamente.

En algún momento, hemos de preguntar en qué han resultado estos desembolsos. El gobierno no ha caído ni se ha derrotado a la insurrección, eso está claro. Pero ¿hemos creado, mientras queríamos dar apoyo al nacimiento de un gobierno civil y democrático, una situación que dificulta el control necesario de los militares por los sectores civiles? y ¿no es este parte del problema advertido en el curso de años recientes de porcentajes cada vez mayores de nuestra ayuda bilateral designados al sector militar y a fines estratégicos más que de desarrollo? Cuando, en el presente año, se comprometen así dos terceras partes de toda la ayuda bilateral, mientras que en 1973 la porción era de solo una cuarta parte, hemos de poner decididamente en tela de juicio la orientación de nuestro programa de ayuda exterior.

Nicaragua es el único país de la región que no recibe ayuda económica o militar de los Estados Unidos; se ha hecho cada vez más dependiente para dicha ayuda de la Unión Soviética y sus aliados, cuestión de creciente preocupación para los países democráticos de la región. La guerra de atrición por las fuerzas irregulares de desafectos nicaragüenses ("los contras"), financiada principalmente por entidades, tanto públicas como privadas, de este país, ha sido hasta hace poco el factor dominante de la

vida nicaragüense y la principal cuestión de política en nuestros días. Las tensiones entre los Estados Unidos y Nicaragua han empeorado a causa del fracaso de las relaciones bilaterales entre los dos países. Fuentes fidedignas han atribuido a ambos lados muchas violaciones de los derechos humanos. Se han advertido ampliamente los ataques de los contras a los no combatientes, el reclutamiento y los raptos forzados, y un uso extensivo de minas terrestres. Al igual que lo han sido el tratamiento abusivo por los sandinistas de los prisioneros y detenidos, las restricciones excesivas de las actividades sindicales, de la libertad de expresión y de otras libertades civiles y los reportes de la violación del proceso judicial por parte de Nicaragua a este respecto puede no ser, según las principales comisiones internacionales de los derechos humanos, el peor de la región, pero es suficientemente negativo para preocupar a todos los que favorecen el desarrollo de las instituciones democráticas.

Un campo de especial preocupación para nosotros como obispos ha sido el conflicto sumamente desafortunado que ha surgido entre el gobierno y los líderes de la Iglesia Católica, en el que el gobierno en varias ocasiones ha utilizado los poderes excepcionales del estado para privar a la Iglesia de personal, de propiedad y del ejercicio libre del ministerio. La expulsión de un obispo, la expatriación de un ayudante clave del Arzobispo, el cierre de la estación de radio de los obispos y la prensa de la archidiócesis, todo ello en los últimos dos años, así como la anterior expulsión de varios sacerdotes y religiosos extranjeros, han sido cuestiones de profunda preocupación cuya resolución hemos pedido repetidas veces. Aplaudimos los primeros pasos ya

iniciados para corregir estas situaciones dentro del marco del proceso de paz, específicamente la reapertura de Radio Católica y el permiso de regreso a tres clérigos. Instamos a que se resuelvan rápidamente los obstáculos que aún existen. Nos unimos a la Iglesia de Nicaragua en la defensa de su derecho a predicar el Evangelio sin ser el blanco de hostilidades ni interferencias.

La guerra ha sido la cuestión central y el centro desafortunado, casi exclusivo, del debate de política en este país. No hay cuestión de la política hemisférica de Estados Unidos que tan profunda y amargamente haya dividido al pueblo norteamericano como la política de nuestro gobierno de armar y capacitar a parte de la oposición nicaragüense llamada generalmente los contras.

Muchos de nuestros ciudadanos, ciertamente muchos de nuestros fieles, parecen verdaderamente convencidos de que tan perverso es el régimen sandinista y tan inevitable la eventual agresión soviético-cubana a través de Managua, que contemplan pocas restricciones a lo que Estados Unidos pueda hacer para evitar tal desenlace.

Hemos indicado por mucho tiempo que existe un problema grave entre Estados Unidos y Nicaragua, pero solo una solución política puede ser eficaz finalmente en Nicaragua al igual que en Centroamérica en general; no hay una solución militar política o moralmente aceptable. Una mayor intensificación del conflicto militar ha de evitarse a todo costo e invertirse decisivamente la tendencia en una nueva dirección.

Hemos indicado que la ayuda militar directa a fuerzas que tratan de derrocar a un gobierno con el que no estamos en guerra y con el que mante-

nemos relaciones diplomáticas es al menos legalmente dudosa y moralmente incorrecta. La colocación de minas por los Estados Unidos en los puertos nicaragüenses, la capacitación y aprovisionamiento de fuerzas irregulares y la agresión contra otro país soberano parecen violar claramente las obligaciones de los tratados en virtud de las cartas de las Naciones Unidas y la OEA y el Tratado de Río, y violar también los principios del derecho internacional consuetudinario. El fallo por el Tribunal Internacional de Justicia en el sentido de que nuestro gobierno era culpable de nuevas violaciones diferentes del derecho internacional es al menos persuasivo. Pero no nos corresponde argumentar la ley ni es nuestro objetivo presentar una política basada en cuestiones jurídicas.

Sí creemos que la política de apoyar a los contras es moralmente errónea, a pesar de lo sinceras que sean las intenciones de las personas que la han formulado y ejecutado. Nuestra enseñanza católica exige que se satisfagan varios criterios estrictos antes de poder descartar la "presunción abrumadora a favor de la paz y contra la guerra" (*The Challenge of Peace: God's Promise and Our Response*, 83).

Algunos argumentarían que la condición de causa suficiente se ha satisfecho bien. A pesar de lo preocupados que hemos estado por aspectos de la Nicaragua actual, nos parece lejos de estar claro que los abusos sandinistas pudieran merecer dicha respuesta letal. Y mucho menos parecen haberse satisfecho los criterios de la probabilidad de éxito, proporcionalidad e, incluso, la autoridad apropiada. Sin enjuiciar formalmente ninguno de estos criterios, mantenemos que el criterio del último recurso se ha ignorado verdaderamente y es sobre

esta cuestión que consideramos que la política de los Estados Unidos hacia los contras sufre el más serio error.

Como el proceso de paz centroamericano está comenzando a demostrar, *hay* alternativas a la política de la guerra; *hay* estructuras disponibles—los propios gobiernos centroamericanos, unidos recientemente por el acuerdo de paz firmado en Guatemala el pasado mes de agosto, el parlamento regional que ahora se está constituyendo, el Grupo Contadora—, todos ellos comprometidos a una resolución pacífica de los conflictos y a la protección de los derechos y libertades fundamentales. Son estas actividades profundamente esperanzadoras de erigir la paz con justicia las que pedimos se fomenten y apoyen. Los medios pacíficos, lejos de haberse agotado, sólo han comenzado a explorarse.

Guatemala celebró la toma de posesión de su primer presidente civil en veinte años en enero de 1986 y es evidente que han ocurrido algunos cambios importantes. Durante dos décadas de gobierno militar, Guatemala había sufrido la violencia política más continua y generalizada de las Américas. Las estimaciones del número de personas que perdieron la vida sólo en la última década varían, pero todos están de acuerdo en que las víctimas, muchas de ellas indios, ascendieron a decenas de miles. El término ahora familiar de “desaparición” entró primero en el vocabulario de los derechos humanos debido a Guatemala, y durante años, la detención arbitraria, la tortura, la desaparición y las matanzas políticas fueron actos cotidianos.

Aunque se ha reducido pronunciadamente la violencia militar contra el personal civil en el campo, aún continúa. Las llamadas aldeas modelos y las

patrullas civiles conscriptas, amigos programas muy controversiales de los gobiernos anteriores, siguen en muchas zonas e impiden con efectividad la deseada repatriación de miles de refugiados en el vecino México.

Subida al poder del Presidente Cerezo, por la que se elimina cualquier castigo posible por delitos cometidos durante los mandatos anteriores, es una fuente de descontento para muchos guatemaltecos. De acuerdo con las principales organizaciones de los derechos humanos, el imperio de la ley no ha sido establecido en Guatemala y la situación aunque ha mejorado, sigue siendo muy deficiente, especialmente para con los indígenas.

Sin embargo, han habido adelantos notables. Parece no haber violencia patrocinada por el estado; los raptos y matanzas se consideran como obra de miembros individuales de la fuerza de seguridad, que no responden a una autoridad superior como antes. Hay un congreso libremente elegido; el presidente ha logrado disolver el muy temido Departamento de Investigación Técnica (DIT), ha patrocinado la importante iniciativa regional de un parlamento centroamericano y ha seguido una política hacia Nicaragua conocida como “neutralidad activa”. Aparentemente también ha tratado de mantener la asistencia de los Estados Unidos al sector militar guatemalteco a unos niveles mínimos.

Guatemala, como el país más extenso y tradicionalmente más prominente de Centroamérica, quizás pueda desempeñar muy bien un papel clave en la búsqueda regional de la paz. Confiamos que nuestro gobierno haga todo lo posible por fomentar la actuación independiente del Presidente Cerezo, y ligue la ayuda al sector militar guatemalteco a la

obligación de dar cuentas y a la eliminación de los abusos en contra de los derechos humanos.

Honduras, en pobreza la segunda nación del hemisferio, ha sido triplemente sobrecargada por las guerras luchadas en los tres países con los que comparte fronteras. Se ha convertido en país al que han acudido miles de refugiados salvadoreños, nicaragüenses y guatemaltecos. Ha pasado a ser el campo de estacionamiento de las principales fuerzas de los contras que atacan a Nicaragua. Se ha convertido en lugar de ejercicios militares estadounidenses muy extensos y repetidos. Aunque adquirió un gobierno civil elegido en esta década antes que sus vecinos, Honduras ha experimentado irónicamente una militarización mayor en estos años que durante la época de gobierno militar.

Ciudadanos hondureños, algunos dicen que hasta 16.000, han sido desplazados de zonas de actividad de los contras. Han habido numerosos informes de hondureños ataques nicaragüenses por la frontera; la presencia de muchas tropas de los E.U.A. crea una serie de problemas únicos. Cualquiera que sea la verdad de estos informes, está bien claro que Honduras ha sido convertido en un títere entre conflictos no propios y merece ser liberado al menos de las atenciones excesivas de nuestro sector militar. Creemos que no se justifica emplear tanto capital y esfuerzo en desarrollar instalaciones militares temporales ni en realizar ejercicios militares repetidos y costosos cuando el pueblo hondureño claramente necesita una clase diferente de asistencia.

Costa Rica se ha librado en gran parte de la tranquilidad social y política que azota a la región, aunque su grave crisis económica y el gran flujo de

extranjeros indocumentados de los países vecinos presenta retos descorazonadores.

Afortunadamente, Costa Rica ha mantenido por mucho tiempo un gobierno democrático y socialmente responsable y tiene la merecida fama de haber abolido sus fuerzas armadas en el 1949. La creciente militarización de la región que tanto lamentan los obispos centroamericanos no debe, de ninguna manera, socabar la ejemplar tradición costarricense de no tener milicia.

El asunto más reciente de orgullo para el país, el Premio Nobel para la Paz de 1987 otorgado al Presidente Oscar Arias Sanchez, reconoce esta tradición pacifista y simboliza la aclamación universal del proceso de paz en Centroamérica dirigido por Arias. Nos unimos a los obispos de América Central en ferviente gratitud por esta magnífica iniciativa del Presidente Arias y de los otros cuatro presidentes de Centroamérica y prometemos nuestras oraciones y apoyo total para el triunfo de los Acuerdos de Esquipulas II.

Panamá, que aunque con frecuencia se ve al margen de América Central, comparte muchos de sus problemas. Conflictos internos recientes han subrayado el control militar excesivo y su intervención en áreas civiles del gobierno. Aplaudimos las recientes y repetidas llamadas de los obispos panameños por la protección efectiva y completa de los derechos civiles y el proceso democrático y por la promoción socio-económica de esos numerosos sectores pobres que permanecen fuera del progreso de la nación.

Instamos a nuestro gobierno para que desarrolle una política constante hacia Panamá, respetando totalmente la soberanía nacional de Panamá y los

tratados Torrijos-Carter de 1977, y al mismo tiempo enfatice respeto por los derechos humanos y sociales y su promoción y el proceso democrático como partes esenciales de la paz nacional y regional.

IV. Recomendaciones resumidas

Terminamos resumiendo algunas de las preocupaciones que hemos expresado en el curso de los años y, nuevamente, en esta declaración, que recomendamos a la comunidad de la Iglesia y a todos nuestros ciudadanos hermanos. Rogamos que se establezca un debate público renovado y mejor informado en torno a estas cuestiones que tanto afectan al futuro bienestar del hemisferio.

América Central en contexto

1. América Central es sólo una parte pequeña, aunque integral, de la América Latina. Instamos a nuestro gobierno a que amplíe su visión política más allá de las crisis inmediatas de la América Central a todo el hemisferio. Los problemas, necesidades y peligros que afronta el resto de la América Latina son mucho mayores que los que afronta el Istmo y, si se dejan sin atender, abrumarán y cancelarán cualquier progreso realizado en la región centroamericana.

Prioridad de justicia económica

2. Las cuestiones de política más urgentes que afronta hoy la América Latina son de índole económica. La política de Estados Unidos, tanto pública como privada, debería acordar la más alta prioridad a corregir los problemas de la enorme deuda externa y frágiles economías de la América Latina. El retorno a la democracia en los principales países de Sudamérica, así como el progreso del gobierno

democrático en Centroamérica, peligran más ante la crisis hemisférica del problema de crecimiento y la deuda externa.

Las superpotencias y la región

3. Las cuestiones de la geopolítica que tanto han dominado el discurso público estadounidense sobre la América Central en años recientes deberían tratarse directamente con las principales fuentes de preocupación para los Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba. Si bien la competencia entre los Estados Unidos y la Unión Soviética es preocupación de los países miembros en la región, la tarea de evitar la introducción de bases soviéticas, armas estratégicas o fuerzas de combate soviéticas en nuestra región fronteriza debería resolverse como cualquier otra importante cuestión que amenace a la paz mundial, mediante negociación directa entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. No debemos utilizar vidas centroamericanas como títeres. . . .

El proceso de paz

4. De las plagas interrelacionadas de la pobreza, la injusticia y la violencia que asedian hoy a la América Central, la violencia de la guerra puede ser, irónicamente, la más fácil de contener. Su terminación es, en cualquier caso, una condición previa para tratar de resolver las demás. Hacemos nuestras las peticiones repetidas de los obispos de la América Central de que tanto los gobiernos como las fuerzas insurrectas inicien con vigor el diálogo

y el proceso de reconciliación pedido por el Acuerdo de Paz Centroamericano. El marco esencial para las negociaciones es el proceso de paz de Esquipulas II iniciado por el Presidente Arias. No es un instrumento perfecto, contiene riesgos y no puede satisfacer cada preocupación legítima inmediatamente; pero es el más razonable y esperanzador plan que se haya creado y hay que darle todas las oportunidades. Rezamos para que la participación de los obispos en cada una de las comisiones nacionales de reconciliación ayudará a asegurar una paz reconciliadora basada en la verdad.

El apoyo necesario de Estados Unidos al proceso de paz

5. Nuestro propio gobierno, que históricamente ha ejercido una influencia excepcional en la región, está hoy en una posición especialmente favorecida para promover el incipiente proceso de paz. Instamos a que la política de los Estados Unidos cumpla de hecho lo que se ha estado repitiendo en principio; a saber, que Estados Unidos está verdaderamente comprometido a la resolución pacífica de los conflictos mediante los procesos políticos del diálogo y la negociación.

El papel de apoyo de otros estados americanos

6. Los obispos centroamericanos han condenado a menudo la injerencia negativa de potencias externas a la América Latina y han alabado los esfuerzos de paz de países vecinos, esencialmente de los cuatro estados fronterizos de Centroamérica, el

Grupo Contadora integrado por México, Panamá, Colombia y Venezuela, junto con "las nuevas democracias" de Sudamérica, el Perú, Brasil, Argentina y Uruguay. El nuevo acuerdo de paz centroamericano, de por sí "impulsado por la voluntad visionaria y permanente del Grupo Contadora y de Apoyo", también encarece a esas repúblicas latinas a que ayuden a verificar el cumplimiento con el proceso.

Estos países no están menos preocupados que nosotros por la resolución pacífica de la crisis centroamericana y pueden bien ser más apropiados para asegurar su éxito. Es importante que nuestro gobierno dé su apoyo específico a las provisiones del plan de paz de Arias y coopere con el mismo y promueva las contribuciones de los otros países americanos.

Refugiados

7. La huida de tantos cientos de miles de centroamericanos de sus países en el curso de esta década, incluyendo los esfuerzos desesperados de un número sin precedentes por buscar refugio en este país, es la señal más clara de la tragedia humana que aflige a la región. Hemos instado a que se dé a su suerte la alta atención que merece y que todos respondan generosamente a las necesidades de estas personas.

Específicamente, instamos a nuestras parroquias, comunidades religiosas y agencias de servicios sociales a que aumenten su ayuda ya encomiable a todos los refugiados, a los que buscan asilo y a los desplazados necesitados. Estamos concientes de manera especial en estos momentos de los

que no caben dentro de los requisitos legales de la nueva legislación para la legalización. Instamos a nuestro gobierno a que interprete las condiciones para otorgar asilo político tan amplia y generosamente como sea posible y encarecemos decididamente que, incluso a aquellos centroamericanos que no reclaman ser refugiados políticos, se les permita, por razones humanitarias, permanecer aquí temporalmente en las condiciones de lo que se conoce como salida voluntaria prolongada.

Nuestra necesidad de reconciliación

8. Finalmente, al igual que reconocemos la necesidad de reconciliación interna dentro de las sociedades profundamente divididas de la América Central, si deseamos lograr la paz y el progreso, también reconocemos que nuestra propia trama social ha sufrido gravemente en años recientes precisamente en torno a las cuestiones centroamericanas. Nuestra sociedad, ciertamente nuestra comunidad católica, ha sido profundamente dividida, en nuestra opinión innecesariamente, en estos últimos años debido a criterios divergentes acerca de la América Central, y reconocemos nuestra necesidad de reconciliación.

Instamos a los líderes de nuestros partidos nacionales a que utilicen el período conducente a las elecciones de 1988 para construir un consenso nacional en torno a los retos verdaderos que afrontamos en el hemisferio, sin permitir una polarización más profunda sobre cuestiones de importancia menos central. Instamos a nuestros hermanos católicos, cualquiera que sean sus criterios políticos, a que consideren la forma en que mejor pudieran

llevar las perspectivas morales a la angustia humana sufrida hoy en la América Central. Pedimos sus esfuerzos para apoyar a los pobres de América Central con ayuda humanitaria y fondos para el desarrollo.

V. *Conclusión*

Ofrecemos estas reflexiones como obispos, tratando de considerar estas cuestiones de política pública desde el punto de vista de nuestra fe y de la enseñanza social de la Iglesia. Las ofrecemos como ciudadanos conscientes de nuestra responsabilidad de contribuir de acuerdo con nuestra capacidad a la formulación de políticas cada vez más justas y humanas.

Renovamos nuestra llamada insistente por la busca de negociación, paz y reconciliación en estos momentos de gran oportunidad y peligro para la región. Hay señales de mucho progreso en los esfuerzos extraordinarios de las naciones de América Central para formular un acuerdo regional de paz y de empezar a realizarlo. Aplaudimos especialmente los esfuerzos del Cardenal Obando y Bravo, del Arzobispo Rivera y Damas y de los otros obispos de la región para mediar y avanzar el proceso de negociación. Pero estos esfuerzos necesitan ser apoyados activamente, ensanchados y desarrollados. Necesitan el apoyo fuerte y persistente de los Estados Unidos. Pedimos a nuestro gobierno que haga todo lo posible para apoyar los esfuerzos regionales y cambiar la guerra por la negociación, las violaciones de los derechos humanos por el respecto a la libertad humana. Canalicemos nuestras energías y recursos en la región para construir instrumentos de paz y no armas de guerra, para las negociaciones constructivas y no los conflictos armados, para establecer la paz y fortalecer la libertad y la democracia. Trabajemos juntos para resolver las injusticias económicas que son el centro de muchos de los conflictos de esta agitada región.

Este año marca el vigésimo aniversario de la gran encíclica del desarrollo de Pablo VI, *Populorum Progressio*. Al comentar sobre esa carta de su predecesor, el Papa Juan Pablo dedicó el mensaje del Día Mundial de la Paz de este año a los temas del desarrollo y la solidaridad, las claves de la paz, y puso de relieve algunos de los mismos principios que hemos suscitado en nuestra declaración.

“El espíritu de solidaridad”, insiste el Papa Juan Pablo, “es un espíritu que está abierto al diálogo”, uno de cuyos frutos puede ser acuerdos regionales “para promover el bien común y fomentar negociaciones bilaterales. . .” Las naciones han de tener libertad para crecer y desarrollarse como socios iguales. “El buscar superioridad económica, militar o política, a expensas de los derechos de los otros países pone en peligro cualquier posibilidad de un desarrollo verdadero o paz verdadera”. Entre los grandes problemas que afrontamos hoy, el Papa menciona la deuda externa del mundo en desarrollo y el problema crucial del desarme, advirtiendo las graves amenazas para la paz mundial que presentan “las tensiones Este-Oeste y las desigualdades Norte-Sur”. “Todos los estados tienen responsabilidad de la paz mundial y esta paz no puede asegurarse hasta que una seguridad basada en los armamentos sea reemplazada paulatinamente por una seguridad basada en la solidaridad de la familia humana”.

Creemos que la paz es posible, que la paz en la América Central puede y ha de construirse mediante el diálogo y los procesos de actividades políticas en vez de militares, y que ha de ser sostenida por la solidaridad de otros países, incluyendo la

asistencia económica necesaria que los países más ricos pueden proporcionar.

Pedimos la bendición de Dios al pueblo que sufre en la América Central, especialmente a los más afectados por años de crisis como los refugiados, los heridos, los enlutados. En este año de María, pedimos a Nuestra Señora de las Américas que proteja a todos los que sufren y laboran por la paz en la América Central.



Publication No. 192-X
Office of Publishing and Promotion Services
United States Catholic Conference
1312 Massachusetts Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20005-4105

ISBN 1-55586-192-X

Des de la **Papete**
Secrét
(Fr. Pol.)

Des Tuamotu
(Fr. Pol.)

French
Polynésie
(FR.)

Des Tubuai